

LOS AFROAMERICANOS: UNA AGENDA DE REPARACIÓN Y JUSTICIA RACIAL

Las etiquetas con que son definidos y se autodenominan las minorías visibles no deberían formar parte de los debates sobre lo políticamente correcto; no obstante, para el colectivo de raza negra y origen africano, las denominaciones aún son tabú en Estados Unidos. Smith (1992) reflexiona sobre cómo en un siglo, los términos estándares para definir a este grupo racial han pasado de *colored*, negro, *nigga*, *black*, y más recientemente a *African-American*. Esta polisemia refleja los intentos de esta minoría y de la sociedad estadounidense en su conjunto para reconstruirse y desafiar una historia de subordinación y racismo. Tomando en cuenta el razonamiento anterior, en este libro se usan indistintamente los términos negros, afroamericanos y similares para identificar a estos colectivos, sin ningún interés de causar polémica y reconociendo que cada una de las denominaciones tiene sus críticas y una carga histórica propia. Una vez hecha esta precisión conceptual, es fundamental analizar los rasgos de la identidad de la minoría negra y sus demandas colectivas en Estados Unidos.

En el escenario político estadounidense, usualmente se toma en cuenta a los afroamericanos cuando se quiere movilizarlos como votantes o cuando surgen disturbios raciales; sin embargo, su agencia minoritaria es digna de un estudio más exhaustivo. Para contribuir a esto, en este capítulo inicialmente se introducen algunas variables que permiten ubicar las particularidades demográficas y socioeconómicas de este colectivo. Se hace especial énfasis en aquellas características que los cohesionan y en aquellas desventajas que fragmentan su identidad colectiva.

La línea de color, la segregación social y la racialización, que persisten en Estados Unidos, tienen un anclaje histórico. La identidad de los afroamericanos no se puede entender sin estudiar los legados de la esclavitud y de la segregación que a través del tiempo han obstaculizado el ejercicio de sus

derechos civiles y políticos. Por lo anterior, también se analizarán las conquistas sociales y los avances legales clave que han moldeado su incursión política en Estados Unidos.

La parte nuclear del capítulo consiste en analizar tres demandas clave de la agenda de la minoría afroamericana: la desigualdad económica, el racismo institucional y la criminalización en el sistema judicial. En torno a la primera se exploran sus percepciones sobre la acción afirmativa y su papel en el sistema de seguridad social. Sobre el racismo institucional y la criminalización del colectivo se plantean sus demandas por una reforma al sistema de justicia y la revitalización de la acción colectiva de *Black Lives Matter* (Las vidas de los negros importan). Analizar la forma en cómo llevan a la política formal y presionan por cambios institucionales en torno a estas demandas permitirá hacer un balance sobre su posición, sus grados de representación descriptiva y sustantiva y su influencia.

Elementos de cohesión y fragmentación del capital político afroamericano

Según estimaciones de la Oficina del Censo de Estados Unidos (U.S. Census Bureau, 2020a), el 13.4 por ciento de la población reporta que es de raza negra. Este colectivo constituye el tercer grupo etnoracial con mayor presencia en el país, detrás de los blancos y los hispanos. El colectivo afroamericano es muy joven; se calcula que un 31 por ciento de la población negra es menor de veintiún años. La edad promedio de este subgrupo social es de treinta y dos años, frente a los cuarenta y dos que son la media general de los estadounidenses (U.S. Census Bureau, 2020a). Según las proyecciones poblacionales, este colectivo continuará creciendo sostenidamente, pero su porcentaje global disminuirá frente a otras minorías étnicas que crecen a mayor ritmo, como los asiáticos y los latinos.

Los efectos de la esclavitud, la subordinación racial y la segregación urbana se han combinado con nuevas formas de desigualdad, lo cual influye en su conjunto sobre las vidas de los afroamericanos. En el cuadro 4 se pueden apreciar algunos datos relevantes sobre su condición socioeconómica.

En estos datos es visible cómo los afroamericanos están por debajo de la media en todos los indicadores sobre el estatus socioeconómico en Estados

Unidos. La brecha de desigualdad se amplía aún más si se tomaran como referencia solamente las cifras promedio para blancos y negros. Al respecto, Glenn Loury (2003) sostiene que círculos viciosos sociales y culturales han tenido como resultado patrones de estereotipos raciales y discriminación sostenida, que perpetúan las desigualdades hacia los estadounidenses negros.

CUADRO 4
DATOS SELECTOS SOBRE EL
ESTATUS SOCIOECONÓMICO AFROAMERICANO (2017)

<i>Indicador</i>	<i>Media nacional</i>	<i>Media afroamericanos</i>
Ingreso anual en los hogares (dólares)	61 372	40 258
Desempleo (%)	3.6	6.7
Personas viviendo bajo la línea de pobreza (%)	12.3	21.2
Propietarios de vivienda (%)	63.9	43
Esperanza de vida (años)	78.6	76.2
Tasa de terminación de bachillerato (%)	84.6	69
Población con educación superior (%)	33.4	23

FUENTE: Elaboración propia con datos del U.S. Census Bureau (2019d).

La dispersión geográfica de este colectivo es otro factor importante para entender sus dinámicas en la esfera pública. Actualmente, el 58 por ciento de los afroamericanos se sigue concentrando en el sur del país. El cuadro 5 muestra cuáles son los estados con mayor concentración.

Esta concentración geográfica tiene efectos importantes sobre el capital sociopolítico de la minoría; por ejemplo, determina su grado de influencia electoral y sus posibilidades de articular movilizaciones masivas para ejercer presión colectiva. Podemos observar que en el sur profundo estadounidense (*deep south*), los ciudadanos negros son menos en números absolutos, pero son más en términos porcentuales. Por este motivo, en estos estados del sur la política coétnica tiene más posibilidades de resonar en la política local y desde allí influenciar a la nacional.

Antes de analizar sus interacciones en la esfera pública, es necesario repasar los indicadores sobre los que se construye el capital político negro. En las elecciones de 2020, treinta millones de ciudadanos negros calificaron como electores, y constituyeron el 12.5 por ciento del electorado (Black

Futures Lab, 2020). La emisión del sufragio entre los afroamericanos fluctúa mucho dependiendo del clima político. Por ejemplo, en las elecciones de 2014, un 40.6 por ciento de ellos votó; dos años después, en las presidenciales de 2016, el 66.9 por ciento de los electores negros votaron y un 51.4 por ciento ejerció su derecho ciudadano en las urnas en 2018 (Krogstad *et al.*, 2019). Naturalmente, las elecciones con récords de participación más altos fueron en las que contendió Barack Obama por la presidencia. En 2008 hubo un 65 por ciento de participación de los afroamericanos y un 66.6 por ciento en la reelección de 2012 (Krogstad y Lopez, 2017). Esto, a pesar de que Obama se inclinó por una campaña desracializada.

CUADRO 5
CONCENTRACIÓN DE LA POBLACIÓN NEGRA
EN ESTADOS UNIDOS

<i>Estados con mayor población</i>			<i>Estados con mayor porcentaje</i>		
<i>Estado</i>	<i>Total</i>	<i>%</i>	<i>Estado</i>	<i>%</i>	<i>Total</i>
Texas	3 936 669	14	Distrito de Columbia	48	338 373
Florida	3 867 495	18	Misisipi	39	1 152 261
Nueva York	3 763 977	19	Luisiana	34	1 571 529
Georgia	3 549 349	34	Georgia	34	3 549 349
California	3 024 208	8	Maryland	33	1 972 270
Carolina del Norte	2 448 077	24	Carolina del Sur	28	1 438 997
Illinois	1 991 107	16	Alabama	28	1 352 906
Maryland	1 972 270	33	Carolina del Norte	24	2 448 077
Virginia	1 748 383	19	Delaware	22	206 290
Pensilvania	1 593 786	13	Virginia	19	1 748 383

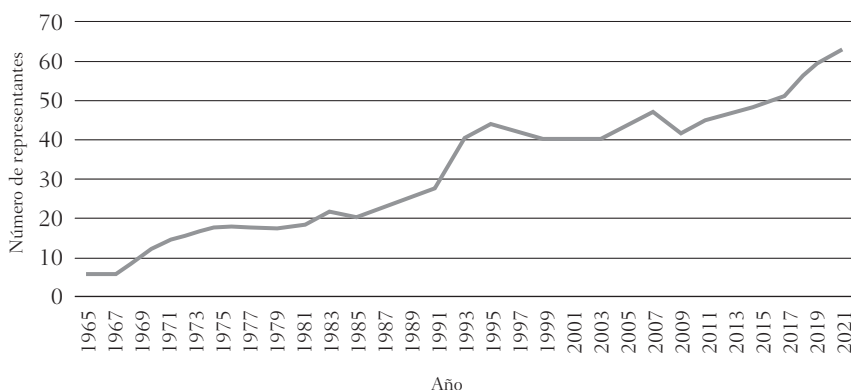
FUENTE: Elaboración propia con datos del U.S. Census Bureau (2020a).

Sobre la afiliación partidista, los electores negros se identifican muy ampliamente con el Partido Demócrata. En una encuesta realizada por el Pew Research Center (Budiman, 2020) se encontró que los electores negros son el grupo de demócratas más sólido, con un 83 por ciento, mientras que únicamente un 10 por ciento de esta minoría racial son militantes republicanos. Esta amplia preferencia por los demócratas tiene como consecuencia que este subgrupo social tenga un papel importante en las elecciones primarias de este

partido, y que tengan una mínima influencia en la selección de candidatos republicanos. Además, el poder en las elecciones generales se diluye fácilmente frente otras minorías con afiliación partidista más volátil y sujetas a menores mecanismos de supresión. Lo que sí es cierto es que en los lugares donde el voto duro afroamericano está más concentrado y es más sólido para los demócratas, se dan ganancias políticas para el ala progresista del partido.

¿Qué avance ha tenido este electorado en su representación sustantiva? Mientras que los afroamericanos constituyen el 14 por ciento de la población, sólo el 8 por ciento de los congresistas pertenecen a esta minoría visible. En la siguiente gráfica se aprecia el progreso en su representación descriptiva.

GRÁFICA 3
AFROAMERICANOS EN EL CONGRESO



FUENTE: Elaboración propia con datos de U.S. Congress (2020).

La baja participación en las elecciones intermedias refleja cómo los afroamericanos se interesan más por la política nacional que por los escenarios públicos inmediatos. Esta situación provoca que más de 1 200 000 afroamericanos, que viven en 175 comunidades, no tengan concejos locales que los representen descriptivamente (Shanton, 2014). Un ejemplo paradigmático ha sido la ciudad de Ferguson, en Misuri, que en 2014 experimentó manifestaciones violentas luego del asesinato de Michael Brown a manos de la policía. En esta ciudad, con un 67 por ciento de habitantes de raza negra, sólo uno de los seis representantes en el concejo local es afroamericano, y sólo el 3 por ciento de los oficiales de policía son negros.

La incorporación política de los afroamericanos ha sido lenta debido a cuestiones internas y externas a este segmento poblacional. Para comprender mejor los mecanismos de cohesión y fragmentación de los afroamericanos como una minoría política, hay que repasar su historia, que nos recuerda los dispositivos de subordinación y supresión a los que han estado sometidos, y también allí encontramos el anclaje de los reclamos de reparación y justicia social presentes en la agenda actual del colectivo negro.

La incursión política y la eterna lucha por los derechos civiles

La historia de los afroamericanos está marcada por dos grandes cismas que los han posicionado en el epicentro de Estados Unidos: el fin de la esclavitud y la eterna lucha por los derechos civiles. El estatus y las percepciones políticas actuales están enraizadas en la deshumanización y subordinación que originaron sus luchas sociales del pasado. Con esta motivación, haré un breve repaso de los momentos clave en la historia de la incursión política afroamericana.

La condición de esclavitud bajo la cual miles de personas de raza negra fueron llevadas a lo que hoy son las Américas se caracterizó por la deshumanización y la sistemática privación de derechos humanos fundamentales. El racismo institucional contra la raza negra en Estados Unidos se desarrolló más ampliamente después de la independencia. Se estima que más de cinco mil patriotas negros se unieron al ejército continental pensando que la joven nación sería un remanso de libertad para ellos (Gilbert, 2012); sin embargo, la unión de las Trece Colonias fue negativa para los avances que los afroamericanos habían obtenido en algunas legislaturas locales.

Antes de la entrada en vigor de la Constitución había voto universal para los propietarios de un patrimonio de cincuenta libras en Nueva Jersey (incluidas mujeres solteras y negros). Los estados de Vermont (1777), Pensilvania (1780), Nuevo Hampshire (1783), Massachusetts (1783), Connecticut (1784) y Rhode Island (1784) abolieron la esclavitud inclusive antes de ratificar la Constitución. En 1787, el territorio del Noreste, que actualmente incluye a Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, Wisconsin y Minesota, la prohibió (Gilbert, 2012). En sentido contrario, a pesar de las palabras de libertad que

emanan de la Declaración de Independencia y de la Constitución, los estados al sur de la línea imaginaria Mason-Dixon decidieron institucionalizarla.

En 1857 se dirimió en la Suprema Corte el caso *Scott vs. Sandford*, en torno a la petición de emancipación de Dred Scott. Esta sentencia determinó que ni los esclavos, ni los negros libres, gozaban de la ciudadanía estadounidense y que además no eran elegibles para solicitarla (Patterson, 1999). Según la Suprema Corte, los esclavos, al no ser ciudadanos sino propiedad privada de ciudadanos, carecían de personalidad jurídica, y sus casos en contra de ciudadanos no estaban sujetos a revisión judicial. Ésta sería calificada en Estados Unidos como la peor decisión en la historia de la Suprema Corte debido a las consecuencias sobre los derechos de las minorías raciales en el país (Patterson, 1999), con derivaciones legales que sólo pudieron derogarse con la Guerra Civil.

Por compromisos entre estados abolicionistas y esclavistas durante las convenciones constitucionales, se tomaba como referencia a tres quintas partes de los esclavos para asignar asientos en la Cámara de Representantes y para establecer contribuciones (Ohline, 1971); sin embargo, en la mayoría de los estados estas poblaciones no tenían derechos políticos para que sus miembros pudieran ser electos. En 1808 se había prohibido la importación de esclavos desde África, pero no se liberaba a los que habían nacido bajo esta condición en Estados Unidos. Esto coincidió con un cambio en el modelo económico que favorecía la rápida industrialización del país y necesitaba mano de obra asalariada (Zinn, 2015); también convergió una coyuntura en la que la política de masas era crucial para que los partidos ganaran o perdieran control electoral. Las disparidades entre las percepciones de los estados del norte y del sur en el modelo económico y en los arreglos electorales desataron la Guerra Civil en 1861.

En plena guerra, el presidente Abraham Lincoln hizo la Proclamación Presidencial 95 (Lincoln, 1863), mediante la cual liberó a los esclavos del país. La emancipación tuvo verdadero efecto legal y práctico hasta el triunfo de la Unión sobre los Confederados en 1865. Después de la Guerra Civil se pactaron las Enmiendas de la Reconstrucción con el objetivo de reconciliar al país ante las divisiones ideológicas y los diferentes proyectos de nación (U.S. Senate, 1865). La más famosa es la Decimotercera Enmienda Constitucional (1865) que abolió la esclavitud y el trabajo forzado, salvo como castigo por hechos criminales. Luego, la Decimocuarta Enmienda (1868) aseguraría

la protección igualitaria de la ley a todas las personas en el territorio y les garantizaría ser sujetos de derechos. Finalmente, la Decimoquinta Enmienda (1870) estableció que el derecho al voto no puede ser negado a causa de la raza, color o previa condición de servidumbre.

Estas enmiendas tuvieron efecto inmediato, pero no duradero sobre la representación de las personas de raza negra en el Congreso estadounidense. Los cambios se dieron primero en el Senado, que entonces no era elegido por voto popular directo en todos los estados. En 1867, Hiram Rhodes Revel fue nombrado senador por la legislatura de Misisipi, y Edward Brooke por voto popular en Massachusetts (Linde, 2017). Ahora bien, fue hasta 1993 que Carol Moseley Braun fue elegida como la primera mujer negra en el Senado por Illinois (Mansbridge y Morris, 2001). Desde el fin de la Guerra Civil hasta nuestros días, sólo una decena de senadores negros han ocupado asientos en esta Cámara.

En el caso de la Cámara de Representantes, en 1870 Joseph Hayne Rainey fue la primera persona de raza negra en servir ahí representando a Carolina del Sur (Linde, 2017). Hacia finales del siglo XIX, una veintena de congresistas negros había trabajado en la Cámara de Representantes. Esto tuvo dos efectos políticos importantes: por un lado, que el Congreso aprobara las leyes de refuerzo, cuyo corolario es la Ley de los Derechos Civiles de 1875, en la que se exigía trato igualitario en las instalaciones públicas y la no exclusión por cuestiones raciales en los jurados civiles. Por otra parte, para contener los cambios radicales, los opositores instrumentaron novedosos mecanismos de supresión y exclusión del voto negro en el sur del país, a la par que institucionalizaron la segregación e incluso fueron condescendientes con la violencia racial ejercida por grupos supremacistas blancos.

En la pascua de 1873, un grupo de supremacistas blancos perpetró una masacre en Colfax, Luisiana, que dejó más de un centenar de víctimas mortales, casi todas de raza negra, con excepción de dos blancos que fueron víctimas de “fuego amigo” (Keith, 2009). Los detenidos fueron acusados de violar la *Enforcement Act* de 1870 que prohibía obstaculizar el derecho constitucional de asamblea y de portación de armas. El caso fue llevado a la Suprema Corte, que resolvió absolver a los detenidos, y además declaró que la Decimoquarta Enmienda se refiere exclusivamente a acciones gubernamentales, que no es aplicable a los actos llevados a cabo por civiles en contra de otros ciudadanos. Esta decisión judicial vino a legalizar las acciones de violencia

del Ku Klux Klan y de otros grupos de extrema derecha que aumentaron su intimidación contra los políticos, las organizaciones civiles y las ligas de derechos de los afroamericanos en el sur de Estados Unidos.

Durante la década de 1860 se implementaron los códigos negros y posteriormente aparecieron las leyes Jim Crow¹ en el sur exesclavista. Los códigos negros pretendían regresar a los esclavos recién liberados a condiciones laborales precarias, usando como cargo judicial la vagancia, de manera injusta en muchos casos (Wallenstein, 2004). Los afroamericanos debían portar una prueba de empleo, obtener un permiso para abandonar las plantaciones (inclusive en su tiempo libre); incluían restricciones a la compra de armas, prohibición de reuniones grupales y otras medidas que bajo la simple sospecha los condenaban a trabajos forzados (Dickinson, 2003).

Por su parte, las leyes Jim Crow, que se promulgaron entre 1877 y 1965, instauraron la segregación racial en instalaciones públicas como medios de transporte, salas de espera, hospitales, escuelas, baños y cementerios (Tischauer, 2012). La famosa sentencia de la Suprema Corte en el caso *Plessy vs. Ferguson* (1872) legalizó estas prácticas. En 1872 Homer Plessy, de quien se consideraba sólo tenía un octavo de sangre afroamericana, intencionalmente se sentó en un vagón exclusivo para blancos en Luisiana. Su acción fue premeditada para ser detenido y poder iniciar el litigio. A pesar de los argumentos legales y la organización cívica, la Corte llegó a la conclusión de que las cláusulas de “separados pero iguales” no violaban ninguna garantía constitucional. Con esta desafortunada sentencia se legalizó la segregación racial en espacios públicos y privados.

Además de los marcos normativos anteriores, los principales mecanismos que se utilizaron para impedir el voto negro fueron los requisitos adicionales impuestos por los gobiernos locales para excluirlos de las urnas. Por ejemplo, estaba el impuesto personal, cuyo recibo de pago se requería para registrarse como votante con el objetivo de que los más pobres (en su mayoría negros) no pudieran emitir el sufragio. Otro mecanismo fueron las pruebas de alfabetismo que se requerían para registrar a los votantes, con lo cual se excluía a los ciudadanos de origen migrante, a los exesclavos que no tuvieron acceso

¹ Es un misterio por qué el nombre del actor blanco que ridiculizaba a los negros imitándolos vino a dar nombre a la segregación racial en Estados Unidos: “En la década de 1890, se refería a un modo completo de vida. Denominaba a una cultura entera basada en la violencia, el racismo y el miedo que afectó la vida de todos los afroamericanos que vivían en el sur” (Tischauer, 2012: 2).

a la educación y en general, a los más pobres. Finalmente, se implementó la “cláusula del abuelo”, que permitía votar a cualquier persona sin necesidad de acreditar algún requisito adicional, siempre que sus ancestros hubieran votado antes de 1867. Así, se beneficiaba a los blancos pobres, dejando fuera a prácticamente todos los negros en los estados del sur (Schmidt, 1982).

En 1909 se formó la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (National Association for the Advancement of Colored People, NAACP), que ha sido fundamental en la ayuda monetaria y legal para llevar litigios estratégicos a las cortes (McPherson, 1995). Por ejemplo, lograron evitar la segregación gubernamental en distritos residenciales en 1917; luego, en 1947 se integraron las ligas deportivas segregadas por color y en 1948 las fuerzas armadas; además, en 1954 ganaron el caso *Brown vs. Board of Education* para acabar con la segregación escolar; uno de sus miembros más famosos fue Rosa Parks, quien provocó el boicot de autobuses de Montgomery en Alabama. Después, el movimiento de resistencia civil pacífica de Martin Luther King Jr. y las propuestas más radicales de otros líderes como Malcolm X complementaron esta nueva etapa de lucha por los derechos civiles.

La Ley de los Derechos Civiles de 1964, que prohibía la discriminación sobre la base de raza, color, religión, sexo u origen nacional, y la Ley de Derecho al Voto de 1965 fueron las batallas legales ganadas gracias a los movimientos por los derechos civiles; sin embargo, la discriminación, el racismo y la desigualdad socioeconómica no se acaban por decreto. La inacabada lucha por los derechos civiles ha demostrado que en todo el territorio nacional persisten diversas formas de segregación, racialización y marginación contra los afroamericanos.

La búsqueda de mayores oportunidades económicas y derechos civiles había motivado la gran migración. Entre 1910 y 1970, un estimado de seis millones de afroamericanos provenientes de los campos del sur llegaron a las ciudades industrializadas del norte. Sobre estas dinámicas, James Baldwin (2013) explica que no escaparon de los efectos de las leyes Jim Crow, ya que encontraron otras formas de segregación igualmente perjudiciales; Baldwin describe cómo “no se mudaron a Nueva York sino a Harlem, no a Chicago sino al South Side, no a Boston sino a Lower Roxbury” (2013: 64), haciendo énfasis en las condiciones de los barrios violentos, pobres, subfinanciados y segregados en los que actualmente habitan.

Desigualdades y barreras a la movilidad social

De acuerdo con los reportes de Naciones Unidas (UNDP, 2018), el índice de desarrollo humano en Estados Unidos es de 0.922/1, y se posiciona en el lugar catorce del mundo; sin embargo, cuando se ajusta por desigualdad, el país sólo alcanza un 0.797/1. La desigualdad en el ingreso y la concentración de la riqueza han crecido en las últimas tres décadas en Estados Unidos, y esta tendencia de incremento se mantiene (Piketty y Saenz, 2014). La desigualdad económica y el sistema de seguridad social protagonizan los debates de la opinión pública y polarizan a los votantes a partir de sus identidades políticas.

En 2016, el jugador de fútbol americano Colin Kaepernick inició una serie de protestas que consistían en arrodillarse durante la ceremonia del himno previa al partido. Según sus declaraciones, ésa era una forma de apoyar a los oprimidos que no tienen voz; particularmente, protestaba contra el trato que reciben los negros en el país. Varios deportistas afroamericanos se unieron a su protesta, pues aseguraban que no podían permanecer de pie y entonar un himno que consideran como racista y esclavista. Estas manifestaciones de descontento encontraron tanto apoyo como críticas en la sociedad estadounidense.

Melvin Olivier y Thomas Shapiro (2006) plantean un dilema interesante: explican cómo las listas de personas con mayor ingreso anual en Estados Unidos cada año incluyen en su *top* a numerosos afroamericanos (principalmente artistas, deportistas, *showmen*, etc.); sin embargo, las listas de los más ricos del país no incluyen a ninguno. Estas brechas entre el ingreso y la riqueza tienen causas estructurales. A partir de esto, los autores sugieren que la desigualdad económica no se puede analizar sólo a través de los indicadores de ingreso, sino tomando en cuenta el estatus económico del colectivo en su conjunto.

Cuando se cuestiona a los afroamericanos sobre cuáles consideran sus principales obstáculos para mejorar su estatus socioeconómico, las respuestas se enuncian en el siguiente orden: 1) discriminación/racismo, 2) menos acceso a trabajos bien pagados, 3) menor disponibilidad de buenas escuelas en sus barrios (Horowitz *et al.*, 2019). Los encuestados blancos, al ser interrogados sobre la situación de los colectivos negros, consideran que el principal problema es el menor acceso a buenas escuelas, seguido por el racismo y la inestabilidad familiar. La tradición meritocrática del “hombre hecho a sí

mismo” que persiste en la ideología del *mainstream* estadounidense, provoca que las barreras enunciadas anteriormente no sean comprendidas y mucho menos atendidas.

La segregación residencial en la que se encuentran viviendo las minorías étnicas en Estados Unidos es una consecuencia social de los procesos de industrialización y desarrollo económico, pero también se debe a las políticas públicas. Richard Rothstein (2017) explica que la segregación racial es producto de un proyecto federal diseñado e instrumentado por los líderes políticos más liberales. Añade que “nuestro sistema de segregación oficial no fue el resultado de una sola ley consignada hacia los afroamericanos para diseñar los vecindarios. Más bien, decenas de leyes, regulaciones y prácticas gubernamentales explícitamente raciales se combinaron para crear un sistema amplio de guetos urbanos rodeados por suburbios blancos” (Rothstein, 2017: 3). Esta segregación racial ha sido una barrera a la movilidad social y a la búsqueda de oportunidades. La mayoría de los afroamericanos viven en barrios pobres y violentos, con una subinversión en infraestructura pública como transporte y escuelas, lejos de la oferta cultural urbana (Harvey, 2006).

En Estados Unidos el segmento de edad con mayor concentración de pobreza son los menores. Aproximadamente uno de cada cinco niños estadounidenses vive en familias cuyo ingreso está por debajo de la línea de pobreza. Algo muy preocupante es que los niños negros son cuatro veces más pobres que los niños blancos. Un estudio de The Brookings Institute (Whinship *et al.*, 2018) encontró que el 50 por ciento de los afroamericanos nacen en el quintil económico más bajo de la sociedad estadounidense, pero lo más alarmante son las bajas tasas de movilidad social, ya que el 54 por ciento de los hombres negros y un 60 por ciento de las mujeres permanecerá en ese quintil más bajo. En contraste, la tendencia entre los blancos que nacen en el segmento más pobre y ya de adultos se quedan en ese quintil, es de un 28 por ciento de los hombres y el 30 por ciento de las mujeres. Los contextos marginales en los que los jóvenes negros se desarrollan perpetúan las desventajas socioeconómicas.

Los afroamericanos sufren tanto de desempleo como de subempleo en Estados Unidos; por tanto, entre sus principales prioridades en la agenda política están la creación de oportunidades laborales, el aumento del salario mínimo y la reducción de la brecha racial entre los salarios de blancos y negros. Según las estadísticas, un hombre negro gana un 22 por ciento menos que

uno blanco con características socioeconómicas similares (Whinship *et al.*, 2018). El mismo estudio refleja cómo las mujeres negras están en mayor desventaja, pues en promedio, una afroamericana gana un 34.2 por ciento menos que un hombre blanco en la misma región, con la misma educación y experiencia.

Una de las políticas que más apoyan los trabajadores negros es el aumento del salario mínimo. En 2019, la Cámara de Representantes (dominada entonces por los demócratas) logró aprobar la *Raise the Wage Act* (HR 582), que propone el aumento gradual de los salarios en todo el país. De acuerdo con cálculos del Economic Policy Institute (Black Futures Lab, 2020), los trabajadores negros serán los más beneficiados con un incremento salarial del 38.1 por ciento, ya que son el grupo que más tiende a emplearse en trabajos que pagan salarios bajos.

La situación de bajos ingresos, pobreza y limitada movilidad social de las familias de raza negra provoca que el seguro médico, el acceso a la educación superior y la vivienda asequible sean prioridades públicas del colectivo; ello, a su vez, implica que éste busque una mayor intervención del gobierno para proveer estos beneficios. En general, los afroamericanos consideran que el Estado es responsable de proveer bienestar a la población y que el gobierno debe intervenir ampliamente a favor de las demandas de justicia social; de ahí que la mayor parte del colectivo se identifique con el Partido Demócrata. También de estas demandas surge el supuesto de que los afroamericanos tienen como prioridad la ampliación del sistema de seguridad social.

El sistema de seguridad social y la acción afirmativa

El porcentaje de gasto social del gobierno de Estados Unidos está por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); solamente en los programas de transferencias de efectivo se acercan a la media de la organización (OECD, 2019b). Entonces, ¿qué situaciones ayudan a entender que la economía más grande de mundo no sobrepase el 6 por ciento de gasto público en programas de asistencia social, en un contexto donde los indicadores sobre pobreza y desigualdad económica son desalentadores?

La principal respuesta se relaciona con la percepción pública negativa y la estigmatización social hacia sus beneficiarios. También hay muchas críticas hacia la ineffectividad de estos programas para paliar la pobreza a largo plazo y son cuestionados por fomentar la dependencia en el sistema. En este sentido, lo más preocupante es cómo numerosos estudios sugieren que el sistema de seguridad social tiene color en Estados Unidos (Quadagno, 1996). Además de la racialización de los beneficiarios de la seguridad social, estos estereotipos tienen como consecuencia que el apoyo al adelgazamiento del sistema de seguridad social vaya en incremento en el *mainstream* estadounidense (Gilens, 2009).

El programa más conocido del sistema de seguridad social es el *Medicaid*, que consiste en la asistencia gubernamental para el acceso a la salud dirigido a familias de bajos ingresos. La mayor parte del presupuesto estadounidense en seguridad social se va a este rubro, aunque existen otros programas de transferencia directa de efectivo. Se denomina *means-tested benefits* a los programas sociales disponibles para los sectores de la población que demuestren ingresos menores a límites establecidos; entre éstos se incluyen el seguro de desempleo (*jobseeker's allowance*), apoyo para vivienda y el Programa de Asistencia Suplementaria Nutricional (*Supplemental Nutrition Assistance Program* —SNAP—, popularmente conocido como *food stamps*). El otro mecanismo que nutre al sistema de asistencia social son las deducciones fiscales; por ejemplo, las deducciones directas a las familias de bajos ingresos (*child tax credit* y *working tax credit*).

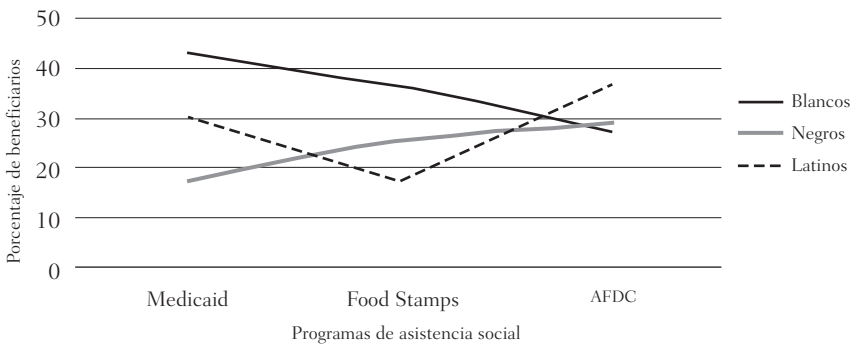
El 41.6 por ciento de los afroamericanos se han beneficiado alguna vez en su vida de por lo menos un programa de asistencia social (U.S. Census Bureau, 2020a); sin embargo, en términos absolutos no son el grupo que más se beneficia del *Medicaid*, del SNAP ni del Programa de Ayuda a Familias con Hijos Dependientes (*Aid to Families with Dependent Children*, AFDC).

Como se puede observar en la gráfica 4, en ninguno de los tres programas que ocupan la mayor parte del presupuesto los afroamericanos son los principales beneficiarios. Ahora bien, cuando se toma en cuenta la participación en la fuerza laboral y las contribuciones fiscales es cuando este subgrupo está sobrerrepresentado en el sistema de asistencia social, aunque, como se ha venido mencionando, estas condiciones de pobreza y marginación tienen causas estructurales, muchas de ellas ajenas al colectivo.

El sistema de seguridad social en Estados Unidos tiene un enfoque centrado en las familias. Particularmente, se favorece a los núcleos tradicionales

compuestos por ambos padres; se supone que estas unidades tienen más posibilidades de salir de los márgenes de la vulnerabilidad. El problema es que la mayoría de los afroamericanos tiene familias monoparentales (U.S. Census Bureau, 2020a) que no son el foco principal. Esta situación contribuye a explicar por qué si los afroamericanos son estadísticamente más pobres, no son el grupo étnico en números absolutos que hace mayor uso del sistema de asistencia social.

GRÁFICA 4
USUARIOS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL



FUENTE: Elaboración propia con datos de Social Security Administration (2019).

Otra situación importante es que las políticas públicas de asistencia social reciben un apoyo popular proporcional a los resultados que presentan. En Estados Unidos, los programas de asistencia social son considerados como un alivio temporal que no debería generar dependencia gubernamental de los beneficiarios. Ante esta situación, las familias susceptibles de cruzar la línea de pobreza o las que están a punto de caer en ella son las que tienden a acreditarse para las ayudas; de esta forma, los gobiernos mejoran las cifras, el problema es que no resuelven los problemas estructurales que generan pobreza. Los afroamericanos pocas veces se encuentran ligeramente debajo o luchando por no cruzar la línea de pobreza, y eso explica por qué no son candidatos deseables de los programas públicos, por lo que recurren más a la ayuda de la iniciativa privada, filántropos y organizaciones civiles.

La población negra es la más pesimista sobre el presente y el futuro de las relaciones raciales. Según una encuesta llevada a cabo en 2019, el 71 por ciento de los afroamericanos piensa que las relaciones raciales en Estados

Unidos siempre han sido malas y un 73 por ciento considera que durante la presidencia de Donald Trump fueron peores (Horowitz *et al.*, 2019). En la misma encuesta se encontró que el 84 por ciento de los afroamericanos, frente a un 58 por ciento de los blancos, piensa que la herencia de la esclavitud todavía afecta la posición de los negros en la sociedad estadounidense. Solamente el 50 por ciento de los entrevistados de raza negra que respondieron considera que eventualmente se llegará a la igualdad de derechos y oportunidades en el país.

El cambio político que han exigido con sus manifestaciones a lo largo de la historia ha tenido como reclamo principal transformaciones sociales profundas y no sólo letra vacía en los códigos normativos. Ante esto, la respuesta que el *establishment* político estadounidense encontró para hacer frente a las demandas fue la acción afirmativa. David Skrentny (2018) resalta lo irónico de que la acción afirmativa se haya convertido en política sin ser apoyada por los grupos afroamericanos de derechos civiles. El autor explica:

Nunca hubo ninguna marcha a Washington por acción afirmativa, nunca hubo presión consistente hacia los políticos para aceptar una política de contratación racial. Aunque los grupos de derechos civiles y los de afroamericanos hubieran apoyado la acción afirmativa como la medida preferida desde 1970, esta política es, por mucho, una construcción de las élites compuestas por hombres blancos que tradicionalmente han dominado el gobierno y los negocios (Skrentny, 2018: 5).

La acción afirmativa es una forma de discriminación inversa o positiva que se instrumenta a modo de resarcimiento hacia grupos que han sido sistemáticamente excluidos con el objetivo de restaurar el balance de justicia. Según Joseph Cowan (1995), la acción afirmativa es una etapa temporal en la que se favorece, a modo de compensación, a aquellos individuos que poseen características de grupo que, aunque son moralmente irrelevantes, en el pasado fueron la fuente principal de exclusión, discriminación y segregación.

En Estados Unidos, la acción afirmativa tiene una marca de nacimiento sobre el sector del trabajo. Se pasó de una no discriminación laboral pasiva por parte del gobierno en tiempos del presidente Franklin D. Roosevelt a una política pública de establecer cuotas en la época de John F. Kennedy. Ambas políticas persisten en los programas de acción afirmativa de la actualidad. Por ejemplo, a través de la Comisión de Igualdad de Oportunidades

en el Empleo (Equal Employment Opportunity Commission, EEOC), el gobierno de Estados Unidos recibió 84 254 quejas de discriminación laboral en 2017 (Benokratnis, 2019). La discriminación racial es la principal queja y también es la que menos tasa de éxito tiene. Sólo un 15 por ciento de los procedimientos llegan a alguna solución y únicamente el 2 por ciento de las quejas de discriminación laboral por cuestiones raciales han ganado un juicio; la tendencia es al abandono del caso (Benokratnis, 2019).

Los estudios demuestran que las organizaciones que promueven acción afirmativa tienen cambios inmediatos en las tasas de participación de las minorías; sobre todo, hay resultados positivos en el sector público y en las grandes corporaciones (Verbeek y Groeneveld, 2012). En contraste, la acción afirmativa recibe poco apoyo de la opinión pública ya que es percibida como un alivio a los efectos de la segregación y no como una solución de fondo a las desigualdades estructurales que enfrentan los grupos minoritarios.

Por ejemplo, respecto de las universidades el 73 por ciento de la población estadounidense encuestada por el Pew Research Center (Graff, 2019) considera que la raza no debe ser considerada al decidir sobre las admisiones a la educación superior; incluso el 65 por ciento de los negros que respondieron coinciden con esta percepción. Estas posturas se refuerzan cuando vemos que, tras décadas de acción afirmativa en las admisiones escolares, los negros y los latinos todavía están subrepresentados en el *top* de las universidades estadounidenses más prestigiadas, en las tasas de conclusión de los grados y en empleos altamente remunerados.

Una crítica recurrente a la acción afirmativa ha sido que constituye políticas aisladas que establecen metas numéricas de resultados esperados, pero se pone poca atención en los mecanismos y procedimientos para lograrlas. Esto implica que no se evalúen ni remedien las causas estructurales de la desigualdad. Es decir, se establecen cuotas de admisión en las universidades, pero no se hace nada sobre la falta de inversión en las escuelas públicas de educación básica de los vecindarios más segregados.

Otro aspecto debatible de los programas de acción afirmativa es que no todo el colectivo se beneficia de igual forma. Los programas son sólo una opción para quienes están listos para aprovechar las cuotas; estas oportunidades son ajenas y desconocidas para los más vulnerables dentro de la minoría. En síntesis, la acción afirmativa beneficia a individuos de manera aislada y no colectivamente a la minoría.

Ante estas críticas, William Julius Wilson (1999) sugiere que el gobierno estadounidense debería transitar de la criticada acción afirmativa a la oportunidad afirmativa. Según él, la primera busca resultados numéricos hacia personas de minorías raciales, mientras que la segunda se basa en promover cambios estructurales que todos puedan aprovechar a través de un acceso justo. Wilson explica que “la oportunidad afirmativa significa renovar el compromiso de la nación para lograr que todos los estadounidenses, sin importar su ingreso, raza u otros atributos, logren el máximo nivel que sus habilidades permitan” (Wilson, 1999: 112); sin embargo, para obtener esto deben atenderse otras vulnerabilidades y desventajas que requieren que la minoría movilice su agencia política y que los representantes desplieguen acción política.

El sistema de justicia y la brutalidad policiaca

En 2015, un tiroteo de un supremacista blanco en contra de la iglesia metodista episcopal africana Emmanuel en Charleston, Carolina del Sur, conmocionó al país. Este episodio de odio y las referencias simbólicas a los confederados y al Ku Klux Klan que hizo el perpetrador motivaron a que numerosos condados de Carolina del Sur aprobaran ordenanzas para la remoción de banderas, símbolos y estatuas de lugares públicos. Incluso, como remembranza histórica, la bandera confederada ondeaba en el capitolio estatal hasta que las protestas obligaron a la legislatura a promover una ley que prohibiera exhibirla en las oficinas públicas de Carolina del Sur.

A partir de esto se sucedió una ola expansiva de resoluciones que autorizaban retirar símbolos y nombres de plazas, oficinas públicas, escuelas y universidades en poblaciones del sur exconfederado, exesclavista y segregacionista. Muchos afroamericanos consideran que estos símbolos y monumentos permanecen allí para intimidarlos y reafirmar la supremacía blanca. Por su parte, la organización Southern Poverty Law Center (2019b), en el análisis “¿Legado para quién?”, hizo un mapa con las ubicaciones de estatuas de confederados en Estados Unidos. En 2019, reportaron que se han quitado 114 símbolos confederados, mientras que 1747 permanecen en pie al estar protegidos por leyes estatales.

El racismo institucional se refiere a una serie de prejuicios, actitudes y acciones llevadas a cabo por las instituciones y los funcionarios que detentan

el poder político, basados solamente en características moralmente irrelevantes como la raza, la religión, el género o las preferencias sexuales. La ilegitimación de las demandas colectivas de las minorías, las acciones públicas orientadas a incrementar la desigualdad y la promoción de ideologías políticas basadas en la discriminación son formas de racismo institucional (Sears *et al.*, 2000). Además de los códigos negros y las leyes Jim Crow, otro ejemplo de racismo institucional han sido las *anti-miscegenation laws* que prohibían el matrimonio, la cohabitación y las relaciones íntimas entre blancos y negros. Únicamente siete estados nunca han aprobado leyes contra el matrimonio interracial, y en la mitad de los estados en el siglo xx aún era ilegal. Fue hasta la resolución del caso *Loving vs. Virginia* (1967) que estas prohibiciones fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte. A pesar de esto, fue apenas en el año 2000 que el estado de Alabama legalizó el matrimonio interracial.

En absolutamente cualquier punto dentro del sistema de justicia, los latinos y los afroamericanos están sobrerrepresentados en relación con su porcentaje en la población (Miller, 2010). Las minorías raciales experimentan tasas más altas de crímenes y homicidios en Estados Unidos, los afroamericanos son las principales víctimas y también son la mayoría de los acusados. Un tercio del total de la población carcelaria más grande del mundo es negra y, si nos concentramos en los centros de detención juvenil, uno de cada dos procesados es negro. Por el contrario, este grupo racial está subrepresentado entre los oficiales de seguridad pública, entre los abogados, los fiscales y los magistrados.

Como Samuel Walker y otros investigadores explican, “a ambos lados de la línea de color hay sospechas y miedo: un sentido de injusticia en la parte de las minorías raciales y miedo del crimen negro en la parte de los blancos” (Walker *et al.*, 2012: 3). Al respecto, *The Washington Post* publicó un artículo (Balko, 2019) que recaba ciento cuarentaiún estudios que concluyeron que en el sistema judicial de Estados Unidos hay un sesgo racial en contra de los afroamericanos. El caso más común fueron las revisiones de rutina, las detenciones y multas desproporcionadas contra conductores negros, quienes experimentan cuatro veces más posibilidades de ser revisados en operativos de tránsito. También se citaron los estudios que demuestran que luego de ser detenidos, los blancos tienen tres veces más posibilidades de ser liberados bajo palabra ante una infundada desconfianza hacia los negros.

Las relaciones entre la policía y los afroamericanos son complicadas en dos sentidos. En primer lugar, tenemos la desafortunada, pero estructuralmente explicable, coincidencia entre barrios claramente raciales y tasas altas de crimen en las principales ciudades estadounidenses. En segundo lugar está la práctica de perfilamiento racial (*racial profiling*) que implica que la policía y el sistema de justicia criminalicen mediante sospecha basada en el fenotipo a las minorías raciales. Walker y otros autores (2012) han encontrado que el perfilamiento racial ocurre principalmente en torno a tres actividades: 1) el tráfico de drogas, 2) el encontrarse fuera de lugar (un afroamericano en un espacio mayoritariamente blanco), y 3) las revisiones y detenciones arbitrarias. Para complementar el argumento anterior sobre la arbitrariedad judicial, el Innocence Project (2020) encontró que el 70 por ciento de los prisioneros liberados por nueva evidencia con uso de ADN son personas de color, de los que un 61 por ciento son negros. Esto significa que el sistema judicial, antes de que la tecnología lo permitiera, sentenció injustamente y sin evidencia física a más personas de raza negra.

Estados Unidos es el país con el mayor número de personas en prisión en el mundo. Las asociaciones civiles reclaman que hay tasas de encarcelamiento desproporcionadas hacia los negros. De acuerdo con la NAACP (2019), los afroamericanos son encarcelados cinco veces más que los blancos. Según esta misma asociación, negros y blancos tienen tendencias similares de consumo de drogas; sin embargo, los afroamericanos son culpados por cuestiones de drogas seis veces más que los blancos. Cabe mencionar que, debido a los estereotipos raciales, los efectos de un récord criminal tienen consecuencias más negativas a mediano y largo plazos para los negros.

La criminalización de las asociaciones de jóvenes afroamericanos que se agudizó desde la década de 1970 tuvo como resultado que la policía no pueda entrar a estos barrios a través de esquemas de intervención basados en la cooperación (Amar, 2010). Es decir, la comunidad prefiere no denunciar con tal de que la policía no entre a la zona debido a experiencias previas de brutalidad injustificada, fabricación de culpables y falta de confianza en el sistema judicial y en la administración de justicia.

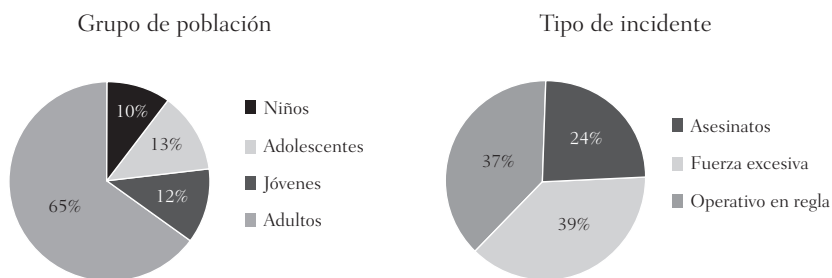
Otra circunstancia que complica las relaciones entre la minoría negra y la policía es la falta de representación en este cuerpo. Cabe mencionar que en Estados Unidos las policías no están unificadas ni centralizadas (son competencia de los condados en la mayoría de los casos). El reporte “Diversidad

en la fuerza: dónde la policía no refleja a las comunidades” (Governing States and Localities, 2015), en el que se compararon casi trescientos departamentos de policía, encontró que las minorías están subrepresentadas en un -24.5 por ciento entre los oficiales. También hallaron que en treinta y cinco de las ochenta y cinco jurisdicciones donde la mayoría de la población es de una minoría racial, su presencia en la policía corresponde a menos de la mitad del porcentaje de esa población. El reporte concluye que la situación se agrava en las jurisdicciones con niveles altos de pobreza.

Matthew Desmond y otros investigadores (2016) encontraron que los episodios de uso de violencia policial excesiva en contra de los afroamericanos tienen dos consecuencias inmediatas: la primera es la mediatización del caso a nivel nacional durante semanas y la segunda consiste en un decremento en los reportes y denuncias de crimen en el lugar. La conducta inapropiada y violenta de la policía reduce la legitimidad de la autoridad legal y amenaza la seguridad pública de los vecindarios. Estos mismos autores (Desmond *et al.*, 2016) aseguran que la falta de confianza en la policía crea una dinámica de códigos de venganza y justicia por propia mano que incrementan la violencia y la condición de vulnerabilidad de las minorías raciales.

Para complementar esta investigación, he llevado a cabo una búsqueda hemerográfica en la que se recabaron los incidentes de brutalidad policiaca contra afroamericanos en lo que va del siglo XXI. Se encontraron setenta y nueve episodios cubiertos por la prensa *mainstream*. Las siguientes gráficas ilustran el grupo de edad de los involucrados y el tipo de incidente.

GRÁFICAS 5 Y 6
CASOS DE BRUTALIDAD POLICIACA REPORTADOS POR LOS MEDIOS
(2000-2019)



FUENTE: Elaboración propia con datos de setenta y nueve notas periodísticas.

La mayoría de los casos analizados aconteció en zonas urbanas con alta concentración afroamericana que, además, tienen una marcada segregación residencial. Encontré que hay una cobertura mediática más prolongada para casos que involucran adolescentes y grupos familiares. También se descubrió que, aunque la mayoría de estos casos sí terminan en las cortes, la tendencia es que se resuelvan mediante indemnizaciones de la policía hacia los involucrados y el cese de los oficiales que incurrieron en brutalidad policiaca. A pesar de que muchos de estos casos ocasionaron protestas, casi en ninguno se llegó a cambios en los protocolos ni en la integración de la fuerza policiaca, lo cual aumentó la frustración de los afroamericanos y su desconfianza en el sistema judicial.

Black Lives Matter: los jóvenes frente a la política

Black Lives Matter (“Las vidas de los negros importan”, BLM) nació entre 2012 y 2013 como un movimiento de nueva generación que canalizó la furia colectiva de los afroamericanos —principalmente de los jóvenes— en contra del racismo institucional. Russell Rickford señala que “el movimiento joven ha revitalizado la confrontación política, dando voz a una rabia popular y justa, estableciendo una nueva piedra angular para la resistencia de base, y poniendo fin a la aquiescencia que ha paralizado a las fuerzas progresistas” (Rickford, 2016). Indudablemente este movimiento politizó a los jóvenes afroamericanos y les dio voz en la esfera pública moldeando la agenda del colectivo, de tal forma que incluso el *establishment* estadounidense volteó a verlos.

El episodio detonador fue la absolución de un policía blanco de Florida, quien en funciones asesinó al joven Trayvon Martin que estaba desarmado. Esta primera etapa del movimiento se basó en la protesta y el activismo en redes sociales. De hecho, el movimiento nació en el ciberespacio con la etiqueta #BLM, utilizada para acompañar datos y testimonios en las publicaciones de Twitter. Ahora bien, fue una serie de episodios de brutalidad policiaca durante 2014 lo que expandió la acción colectiva, dando paso a las demostraciones públicas masivas que inundaron las calles de las principales urbes.

El primer caso fue el asesinato del joven Michael Brown, quien había robado en una tienda de conveniencia y recibió un tiro por la espalda por

parte de un policía de Ferguson. Según los registros de los testigos y las pruebas presentadas, el joven estaba desarmado y tenía las manos levantadas al momento de recibir el disparo letal (Lebron, 2017). Este representativo episodio de abuso policial dio paso al eslogan *Hands Up, Don't Shoot* (“Manos arriba, no disparen”) que luego sería un cántico durante las movilizaciones. También en 2014, el neoyorquino Eric Gardner fue sometido por la policía local con electrochoques que le causaron la muerte por el simple hecho de vender cigarrillos en la calle. Los videos tomados por testigos demuestran el uso excesivo de la fuerza policiaca. Eric Gardner no opuso resistencia física al arresto y aunque clamaba “*I can't breathe*” (“No puedo respirar”) siguió siendo sometido por los cinco policías que le causaron la muerte (*The Guardian*, 2014).

La mayoría de los jóvenes organizadores de BLM ya tenían experiencias previas en ligas cívicas, organizaciones comunitarias y de liderazgo. Las protestas y boicots que iniciaron en 2014 en Ferguson se expandieron en todo el territorio estadounidense durante 2015. Un factor importante para el éxito del movimiento fueron las campañas electorales presidenciales, ya que estos jóvenes organizados hicieron llegar sus demandas a los candidatos demócratas. Los activistas participaron en numerosos eventos de Bernie Sanders, quien los cobijó al interior de su campaña. También Hillary Clinton prometió impulsar una reforma penal y un plan para las comunidades de color. Por el lado contrario, los candidatos republicanos descalificaron el movimiento como exagerado e infundado.

Según información de ellos mismos (BLM, 2020), existen veintiséis capítulos estatales que se comprometen con una plataforma en común. *Black Lives Matter*, como muchos otros movimientos sociales contemporáneos, se caracteriza por el uso de las redes sociales (por eso se abrevia indistintamente también como #BLM), una estructura descentralizada y con una acción colectiva horizontal sin líderes. De acuerdo con la agenda del colectivo, las demandas concretas son:

1. “Terminar la guerra contra la gente negra”, que consiste en la criminalización de los jóvenes negros, su encarcelación masiva y desproporcionada, así como los asesinatos.
2. Reparaciones por la esclavitud y la segregación, que incluyan:
 - Acceso completo y gratuito a la educación superior para toda la gente negra.

- Acceso asegurado a alimentos, vivienda y terrenos.
 - Programas escolares que incluyan su historia; monumentos y expresiones culturales que los dignifiquen.
 - Una comisión para el estudio de propuestas de reparación histórica para los afroamericanos.
3. Inversión en bienestar (educación, trabajo y proyectos comunitarios) en lugar de gasto en los cuerpos punitivos. Recorte de los gastos militares y en energía fósil en favor de las comunidades negras.
 4. Justicia económica: una reconstrucción económica (basada en impuestos, creación de empleo, derechos de los trabajadores, economía social y responsabilidad ambiental) que conduzca a la riqueza colectiva y no solamente reglamente el acceso.
 5. Control comunitario: que los representantes y los funcionarios públicos estén bajo el control de la ciudadanía; que se instaure el presupuesto participativo para las comunidades de color.
 6. Empoderamiento político: mayor voz en la esfera pública y más representación descriptiva.

Esta amplia y ambiciosa agenda tiene gran apoyo dentro del colectivo afroamericano, pero también ha encontrado oposición.

Black Lives Matter ha tenido problemas para vincularse al trabajo de otras organizaciones pioneras como la NAACP y el Black Congressional Caucus. #BLM se ha quejado de la inacción de estos grupos ante la criminalización de los jóvenes negros y la brutalidad policiaca. Mientras tanto, las otras organizaciones consideran que el radicalismo de BLM y su acción colectiva centrada en la protesta no son suficientes para el empoderamiento político de la minoría afroamericana. Por ejemplo, en 2017 el presidente de la NAACP declaró sobre BLM: “Ellos ponen luz sobre los problemas, lo cual es un paso muy importante. Nuestro papel es ir a las cortes, llegar a las legislaturas y a las agencias gubernamentales para solucionar esos problemas” (Blake, 2017). Este tipo de expresiones para desmarcarse de la acción colectiva de BLM afectan la legitimidad del movimiento frente al *establishment*.

Nikita Carney (2016) explica que, mientras que las discusiones sobre los asesinatos de los jóvenes y hombres negros a manos de la policía en redes sociales tienden a enfocarse en el racismo interpersonal, el movimiento BLM tuvo el gran acierto de mover el foco hacia el racismo estructural. Los

jóvenes afroamericanos están cansados de ser frecuentemente víctimas de este racismo que se manifiesta en violencia policiaca, en un doble estándar de justicia y en la desigualdad racial generalizada en las instituciones públicas. Introducir demandas sociales más amplias ha tenido efectos contradictorios. Por un lado, la inclusión de nuevas causas sociopolíticas ha sido fundamental para poder atraer a más miembros y aliados; por el otro, las mayores demandas también han sido causantes de desmovilización cuando las diferentes prioridades y las diversas ideologías se contraponen entre los miembros al interior del movimiento.

A pesar de que muchas de las demandas de BLM tienen pocas posibilidades de concretarse en el escenario político estadounidense, la vitalidad y consistencia del activismo del movimiento han permitido que se logren conquistas parciales en alianza con algunos demócratas. Las plataformas del Partido Demócrata en 2018 y en 2020 incluyeron la reforma del sistema de justicia criminal. El *New Green Deal* introducido por Alexandria Ocasio Cortés y Bernie Sanders incluye muchas de las demandas de BLM, pero en particular la de una economía social que favorezca a las comunidades de color. La forma en que los candidatos a puestos de elección han respondido o se han pronunciado sobre el movimiento ha sido un elemento condicionante del voto negro.

Al interior de BLM las mujeres han articulado un movimiento de empoderamiento político. La congresista Ayanna Presley sentenció en una conferencia de prensa en Filadelfia: “Nosotros no necesitamos caras negras en política que no quieran ser una voz negra” (Klar, 2019). Cuando Donald Trump atacó a la congresista somalí y musulmana Ilhan Omar, un grupo de cien mujeres activistas de BLM crearon un campo de fuerza de apoyo hacia ella. Toda esta participación está teniendo como resultado un incremento de mujeres negras jóvenes electas en todos los niveles de gobierno.

En medio del año electoral de 2020, las tensiones raciales resurgieron. El episodio detonador fue el asesinato de George Floyd, que desató violencia y disturbios en setenta y cinco ciudades del país y cuarenta de ellas tuvieron que establecer toques de queda. El 25 de mayo de 2020 en Minneapolis, Minnesota, tres agentes blancos acudieron a un llamado en una tienda para arrestar a un hombre que intentó comprar comestibles con un billete falso de veinte dólares. A pesar de que era un conflicto insignificante, ejercieron un uso excesivo de la fuerza: uno de los agentes presionó el cuello de Floyd

con su rodilla durante ocho minutos, y le causó la muerte por asfixia ante el grito del detenido “*I can’t breathe*” y los reclamos de los testigos, quienes grabaron el incidente que dio vuelta al mundo. Seis años después de que Eric Gardner clamara la misma frase en un episodio de brutalidad policiaca similar, los afroamericanos siguen experimentando problemas de racismo estructural semejantes, a pesar de sus movilizaciones masivas que en 2020 obligaron a blindar con la guardia nacional al Capitolio en Washington, D.C., y de una mayor simpatía entre sus representantes hacia sus causas de justicia racial.

Balance sobre el desempeño político del colectivo

Los afroamericanos son una minoría doblemente sujeta a la fragmentación: en su interior hay elementos de desmovilización política y desventajas colectivas, y también hay fuerzas externas y condiciones estructurales que suprimen su influencia. La cohesión basada solamente en el fenotipo, una historia compartida y el destino común (*linked fate*) da como resultado una enorme diversidad étnica, ideológica y de clase al interior del grupo. No basta con la solidaridad para movilizar la identidad afroamericana; en la práctica cotidiana, las comunidades negras tienen más divergencias que coincidencias.

Los mecanismos de protesta que despliegan los afroamericanos ante episodios de racismo y cada vez que alguien se convierte en víctima de brutalidad policiaca sólo canalizan la frustración colectiva. El problema es que la protesta y los disturbios no se convierten automáticamente en capital político que se pueda desplegar en las instituciones. Para lograr mayor influencia y el cumplimiento de sus agendas minoritarias, necesitan una masa crítica que les dé voz en los corredores de poder y que pueda articular argumentos sólidos para defender sus demandas frente al *establishment*.

Hay una racialización en la política electoral: las concentraciones más altas de negros en los distritos electorales están asociadas con una declinación en el porcentaje de blancos que se registran como votantes demócratas y con un respectivo incremento gradual en el número de blancos republicanos (Giles y Hertz, 1994). Si agregamos a esta tendencia la dificultad de movilizar la identidad de grupo al interior de la política formal y la abstención electoral causadas por los bajos niveles de confianza en las instituciones, entonces

la subrepresentación descriptiva de los afroamericanos en el gobierno es comprensible (Gamble, 2011). También lo es la sustantiva, debido a que los representantes responden a sus constituyentes activos y la apatía no resuena en los corredores del poder. Los candidatos afroamericanos tienen más desafíos cuando se postulan para una oficina pública que el resto de los grupos raciales en Estados Unidos. Los estudios demuestran que los blancos votan por afroamericanos sólo si consideran que tienen valores compatibles con el *mainstream*, posturas que pueden incluso ser hostiles al progreso de los demás afroamericanos (Gamble, 2011). Por estas razones existe un recurrente distanciamiento entre el político negro y la minoría política, lo cual se refleja constantemente en su desempeño legislativo.

Otra dinámica interesante para entender la subrepresentación consiste en que gran parte de los electores negros no se alinean inmediatamente a un candidato por afinidad racial; el escepticismo inicial de los afroamericanos durante la campaña primaria demócrata de Barack Obama es un claro ejemplo. Igualmente, antes de las elecciones primarias demócratas de 2020 se presentaron dos candidatos negros; la más visible fue la californiana Kamala Harris. Al respecto, el Comité de Acción Política Negro (Black PAC, 2020) no respaldó a sus candidatos étnicos sino que declaró que se apoyaría unánimemente a cualquier candidato que tuviera más posibilidades de derrotar al presidente Trump, independientemente de la raza y la agenda política del contendiente.

La fragmentación interna los vuelve más vulnerables a la influencia externa del *mainstream* político a través de nuevas formas de exclusión, supresión y segregación. Los afroamericanos son el grupo étnico que se enfrenta en la actualidad a mayores acciones del *establishment* para suprimir su voto. El diseño de los distritos electorales concentra al voto duro y dispersa al voto indeciso para que se reduzca su influencia electoral. El estado de Georgia es reconocido como el epicentro de la supresión del voto negro por sus draconianas tácticas burocráticas para complicar el acceso a las urnas; entre ellas, se ha encontrado que se retrasa la emisión de identificaciones estatales, no se aprueban las solicitudes de registro de voto a tiempo, se purgan las listas por no votar recientemente, antes de las elecciones aumentan las aprehensiones arbitrarias para que el detenido no pueda votar, entre otros mecanismos sobre los cuales los activistas informan en cada elección.

El mayor reto de los afroamericanos consiste en mover el foco político de sus constituyentes y de sus representantes del racismo individual al racismo

colectivo del que son víctimas. Existe una agenda en común en torno a las desigualdades, el racismo institucional, las reformas al sistema de justicia, las reparaciones y la justicia social, pero no han logrado promover los cambios necesarios a nivel de legislaciones nacionales y políticas públicas federales. La agencia afroamericana se cataliza fácilmente ante la agresión y frente a nichos de oportunidad, pero cuando las aguas de las convulsiones coyunturales se calman es muy difícil cristalizar su agenda política colectiva.